

Para simplificar las operaciones, desde hace algún tiempo se determinó que el RUT de las personas naturales debía ser el mismo número del RUN. De esta forma, la misma serie de números, tratándose de personas naturales, sirve como RUN y como RUT.

#### c) La cédula de identidad

La cédula de identidad es un instrumento público, en tamaño de tarjeta portable, que tiene por objeto individualizar a una persona natural, mediante la inclusión de su fotografía y los principales datos identificatorios, como el nombre completo, la nacionalidad, el sexo, la fecha y lugar de nacimiento, la profesión, la firma, la huella dactilar y el número de Rol Único Nacional. La cédula es expedida por el Registro Civil, usando tecnologías que impiden su falsificación o adulteración. Hoy se habla de cédula de identidad electrónica, ya que la cédula contiene un microchip electrónico. Las características y menciones de esta renovada cédula fueron fijadas por la resolución del Ministerio de Justicia N° 861, de 2013 (D. Of. 2 de septiembre de 2013).

En principio, todas las personas nacionales y extranjeros residentes de 18 años o más deben contar con su cédula de identidad y deben usarla para identificarse en las diversas gestiones que realicen y en que se requiera su comparecencia personal (cfr. art. 5° D.L. N° 26, de 1924). El Código Procesal Penal faculta a la policía, en los casos en los que proceda el control de identidad, a solicitar la identificación de cualquier persona, la que se realizará mediante documentos como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte (art. 85 CPP).

Las cédulas no son indefinidas y tienen fecha de caducidad, tras la cual deben ser renovadas. El vencimiento está regulado por el D.S. N° 773, de 1997 (D. Of. 17 de enero de 1998).

En caso de extravío, robo o hurto de la cédula de identidad el titular

#### d) El pasaporte

El pasaporte es un instrumento público expedido también por el Servicio de Registro Civil en formato de libreta y que tiene por función identificar a la persona en el extranjero. Los chilenos deben obtener el pasaporte, sea que estén en territorio chileno o en el extranjero, si desean viajar como nacionales. En el extranjero el pasaporte se expide a través del respectivo consulado. A los extranjeros que estén en Chile puede otorgarse un título de viaje o un documento de viaje.

El número del pasaporte es el mismo que el Rol Único Nacional.

La regulación del otorgamiento de este documento se encuentra en el decreto supremo N° 1.010, Ministerio de Justicia, de 1989 (D. Of. 17 de noviembre de 1989).

BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL: PERREAU, E. H., "El derecho de cada uno de los cónyuges a su nombre patronímico y al de su consorte", en *RDJ*, t. 1, Derecho, pp. 31-48; ANÓNIMO, "¿Domicilio o residencia?", en *RCF*, t. III (1887), N° 2, pp. 108-110; PESCIO VARGAS, Víctorio, *La vecindad*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1952; PÉREZ VILLAR, Carmen Gloria, "El Código Civil y proyección en materias de derecho internacional privado. El caso del domicilio y la nacionalidad", en Departamento de Derecho Privado U. de Concepción (coord.), *Estudios de Derecho Civil V*, AbeledoPerrot, Santiago, 2010, pp. 29-45; ESCANDÓN ORELLANA, Pedro, *Del cambio de nombres y apellidos y de las rectificaciones de las Partidas del Registro Civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1988; NOVALES ALQUÉZAR, María de Aránzazu, "Orden de apellidos de la persona nacida. Observaciones a propósito de un proyecto de ley", en *Revista Chilena de Derecho* 30 (2003) 2, pp. 321-330.

### IV. LA CAPACIDAD JURÍDICA Y LA PROTECCIÓN DE INCAPACES, DISCAPACITADOS E INTEGRANTES DE ETNIAS INDÍGENAS

#### 1. La capacidad jurídica

##### a) Concepto

En la misma definición, acuñada por la doctrina, ya que en el Código sólo hay elementos para construirla (cfr. arts. 545, 1445.2 CC), se distingue la capacidad para adquirir derechos y la capacidad para ejercerlos de manera independiente, que dará lugar a la clasificación entre capacidad de goce y de ejercicio.

*b) Capacidad de goce y capacidad de ejercicio*

La capacidad de goce es la aptitud de la persona para adquirir derechos y para contraer obligaciones.

Son capaces de goce, es decir, tienen la posibilidad de ser titulares de derechos, todas las personas. Por ejemplo, un niño recién nacido puede adquirir un derecho de herencia o una indemnización por seguro de vida, aunque no tenga conciencia de ello, y puede también resultar obligado si debe pagar impuestos por esas atribuciones patrimoniales. Lo que no tiene este niño es la capacidad de ejercicio, puesto que ésta supone la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones sin el ministerio de otras personas, es decir, un representante legal. El Código define esta última en términos obligacionales, diciendo que “La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra” (art. 1445.2 CC).

La regla general en ambos tipos de capacidades es que toda persona es capaz (cfr. art. 1446 CC), de manera que lo relevante desde el punto de vista jurídico es el estudio de las incapacidades que constituyen una excepción a esa regla.

Las incapacidades pueden ser generales o especiales, según si se trate de la generalidad de las relaciones jurídicas o sólo de una parte específica de ellas.

La incapacidad de goce general de una persona no es concebible ya que implicaría la ausencia de personalidad. Por ejemplo, una asociación sin

En cambio, existen personas que pueden adolecer de una incapacidad de goce especial, relativa a ciertos tipos de derechos. Así, por ejemplo, ciertos extranjeros no pueden adquirir el dominio de inmuebles fronterizos. También hay personas que son incapaces o indignas para suceder por causa de muerte (cfr. arts. 961 y ss. CC).

La incapacidad de ejercicio puede ser también general y especial. Es general cuando la persona no puede ejercer la generalidad de sus derechos sin el ministerio de otro. Es especial cuando la ley ha prohibido a ciertas personas la ejecución de ciertos actos jurídicos. El art. 1447 dispone que hay incapacidades particulares “que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos” (art. 1447.4 CC). Por ejemplo, es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre padres e hijos sujetos a patria potestad (art. 1796 CC).

La incapacidades de ejercicio generales se suelen conocer abreviadamente por incapacidades de ejercicio sin calificativo.

*c) Fundamento constitucional de las incapacidades de ejercicio*

La incapacidad de ejercicio no se funda en una minusvaloración de las personas sino en una situación de vulnerabilidad en que se encuentran, la que suscita la necesidad de otorgarles la protección debida, ya que ellas no pueden dirigirse a sí mismas ni administrar competentemente sus negocios (cfr. art. 338 CC).

Esta necesidad está recogida en el art. 1º de la Constitución que señala que es deber del Estado dar protección a la población y asegurar la igualdad de oportunidades. Si nadie protegiera y administrara los bienes de las personas incapaces, éstas no tendrían las mismas oportunidades que aquellos que sí cuentan con facultades para desenvolverse con seguridad en la vida social. La incapacidad del menor puede considerarse consagrada

La privación de la facultad de administrar y disponer por sí mismo es una limitación del derecho de dominio justificada en la función social de la propiedad que consiste en los intereses generales de la nación, entre los que se encuentra la protección a la población y el aseguramiento de la igualdad de oportunidades (art. 19.24° en relación con el art. 1° Const.).

En todo caso las limitaciones sólo pueden ser establecidas por ley, y por ello los casos de incapacidad son solamente los contemplados expresamente en la ley. Su interpretación es de derecho estricto y no admite una extensión analógica a supuestos no expresamente regulados.

Por eso, la regla general es la capacidad y las excepciones deben ser establecidas por la ley. El Código Civil lo señala explícitamente: “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces” (art. 1446 CC).

## 2. Personas jurídicamente incapaces

### a) Incapacidad absoluta y relativa

La incapacidad de ejercicio puede ser absoluta o relativa. La distinción radica en la mayor o menor libertad del incapaz para administrar por sí mismo sus asuntos patrimoniales y en la mayor o menor intervención del representante.

Los incapaces absolutos sólo pueden actuar por medio de su representante legal y nunca por sí mismos. Si actúan por sí mismos, sus actos adolecen de nulidad absoluta, no generan obligaciones (ni aun obligaciones naturales) y no pueden ser caucionados (que un tercero garantice el cumplimiento de la obligación del incapaz) (art. 1447.2 CC).

Los incapaces absolutos son:

- 1°) Los dementes;
- 2°) Los impúberes;

A diferencia de los incapaces absolutos, los incapaces relativos tienen cierta independencia. Pueden actuar legalmente ya sea representados o por sí mismos y con la autorización del representante legal. Además, en algunas ocasiones pueden administrar incluso por sí mismos un peculio o patrimonio separado. Por eso, el art. 1447 del Código Civil dice que “sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes”.

Los incapaces relativos son:

- 1°) Los menores adultos;
- 2°) Los disipadores que se hallen en interdicción de administrar lo suyo (art. 1447.3 CC).

Nótese que los disipadores sólo pasan a ser incapaces una vez declarada su interdicción mediante resolución judicial.

La protección de la persona incapaz se realiza mediante la imposición de una carga o función a otra persona para que la sustituya o asista en la administración de sus bienes y demás relaciones jurídicas. Es una función y no un derecho porque se ejerce en beneficio, no del titular, sino de la persona que está sujeta a ella. Esta función es denominada representación legal. El Código Civil dispone que son representantes legales de una persona el padre o la madre que ejerce la patria potestad, su tutor o curador (art. 43).

Se les da tutor a los impúberes. A los menores adultos, interdictos por disipación, dementes y sordos o sordomudos incapaces, se les da curador general.

### b) Los juicios de interdicción y el nombramiento de guardador

#### i) El juicio de interdicción

blece que se pruebe en un juicio contencioso, cuya finalidad es la dictar un decreto judicial de interdicción.

El decreto de interdicción declara públicamente la incapacidad y permite el nombramiento de un curador.

En algunos casos la declaración judicial de la interdicción es condición necesaria para constituir la incapacidad: así sucede con el disipador. Todos los actos que haya realizado antes, por muy ruinosos que sean, son válidos.

En otros casos, la interdicción no es condición necesaria para la incapacidad pero facilita su prueba. Así sucede con el sordo o sordomudo y sobre todo con el demente.

Los actos del demente son nulos aunque no haya sido declarado interdicto, pero en tal caso el que pretende la nulidad debe probar que al momento de celebrarse el acto el sujeto no estaba en su sano juicio. Si no lo prueba el acto es válido.

Por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el demente después del decreto de interdicción son nulos (de nulidad absoluta) y no es necesaria ninguna prueba adicional. Es más no se admite que el demandado alegue que en el momento de celebrar el acto el interdicto obró en intervalo lúcido (es decir, que había recuperado en ese momento la cordura). Hasta hace poco se decía que estos intervalos no eran posibles porque la enfermedad estaba siempre subyacente, pero con enfermedades como el alzhéimer o la demencia senil progresiva parece factible que el enfermo obre en ocasiones con uso de razón. En todo caso, decretada la interdicción del demente, todos sus actos son nulos sin importar si había o no recuperado momentáneamente la cordura (art. 465 CC).

#### *ii) Personas que pueden ser declaradas en interdicción*

Pueden ser sometidas a interdicción las siguientes personas:

manente. Caben todas las enfermedades mentales que impidan que una persona pueda dirigirse a sí mismo. Si hay discusión sobre si concurre en una determinada persona esta circunstancia, el juez deberá acreditarlo recurriendo al informe de peritos (médicos psiquiatras).

2º) Sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente: debe tratarse de un sordo no mudo (sabe hablar) o de un sordo que no puede hablar ni tampoco comunicarse a través de un lenguaje de señas o gestual. No se incluye la persona que no puede hablar pero sí oír, porque normalmente estas personas pueden comunicarse por escrito.

3º) Disipador o pródigo: Se trata de la persona que, por una falta total de prudencia, incurre en reiterados actos de notable mala administración de sus bienes.

Los menores de edad no se declaran en interdicción porque su situación no requiere mayor prueba y, además, es transitoria.

#### *iii) Personas que pueden pedir la interdicción*

Para los casos del demente y del disipador se aplican las reglas de los arts. 443 y 459 del Código Civil, y pueden pedir la interdicción:

1º) El cónyuge no separado judicialmente.

2º) Los parientes consanguíneos hasta en el 4º grado.

3º) El defensor público.

4º) El funcionario diplomático o consular si se trata de un extranjero (art. 444 CC).

5º) En el caso de un "loco furioso" o que causa notable incomodidad, el procurador de la ciudad o cualquiera del pueblo (art. 459.3 CC).

Si se trata de un menor de edad el padre o madre que cace de la patria

mente tenía tutor, al llegar a la pubertad, el tutor debe pedir la interdicción para que se le nombre un curador (art. 458 CC). Si el menor tenía ya un curador en razón de su menor edad, éste debe pedir la interdicción cuando sobrevenga la demencia (art. 459.2 CC).

Para el sordo o sordomudo la ley no dice nada. La doctrina entiende que son las mismas personas que pueden pedir la interdicción del demente, que ya hemos mencionado.

#### *iv) Juez competente y procedimiento*

Es juez competente para conocer del juicio de interdicción el juez de letras con competencia en materias civiles. La competencia territorial se fija según las reglas generales, por lo que será competente el juez del domicilio del demandado. No existe un procedimiento especial, de modo que deben aplicarse las reglas del juicio ordinario (art. 3° CPC). El demandante será quien pide la interdicción, mientras que el demandado será el supuesto demente, disipador o sordo o sordomudo. Si la incapacidad es manifiesta, el juez deberá nombrarle un curador *ad litem* (curador especial) para que lo represente en el juicio.

La disipación se prueba por hechos repetidos de dilapidación que manifesten una falta total de prudencia. La ley pone ejemplos: el juego habitual en que se arriesguen porciones considerables del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, gastos ruinosos, etc. (art. 445 CC). La demencia debe probarse observando la conducta habitual del supuesto demente y sobre todo oyendo el dictamen de facultativos (médicos) (art. 460 CC).

En todo juicio de interdicción procede que se escuche el parecer del defensor público, aunque la ley lo dispone sólo para el caso del disipador (art. 443 CC).

Cuando la incapacidad es notoria, se permite que el juez dicte un decreto de interdicción provisoria pero sólo respecto del demente y del disipador

#### *v) Inscripción del decreto de interdicción*

Los decretos de interdicción provisoria o definitiva deben inscribirse en el Registro del Conservador de Bienes Raíces y notificarse al público por medio de tres avisos publicados en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la región. La inscripción y publicación se limitará a expresar que tal individuo designado por su nombre, apellido y domicilio, no tiene la libre administración de sus bienes (se deja en silencio la causa para proteger la vida privada de la persona) (arts. 447 y 461 CC).

La inscripción conservatoria debe practicarse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar (art. 32.3 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces)

Aunque se ha discutido, y existen ilustres opiniones en contrario, parece que la sanción a la falta de inscripción o publicación es la inoponibilidad del decreto de interdicción respecto de terceros.

Debe criticarse, en todo caso, que la interdicción se inscriba en el Registro Conservatorio, ya que se trata de una circunstancia personal que no tiene que ver con la propiedad inmueble. Lo razonable sería que dicha incapacitación pudiera inscribirse en el Registro Civil, por ejemplo, al margen de la inscripción de nacimiento del incapaz.

#### *vi) Nombramiento de guardador*

Hecha la interdicción, aunque sea provisoria, el juez debe nombrar un guardador. Al impúber debe dársele un tutor. Al menor adulto, al demente, al disipador y al sordo o sordomudo se les nominará un curador general.

Las personas llamadas a ejercer la guarda pueden ser designadas por un testamento, por la ley o por el juez (cfr. arts. 354 a 470 CC, pero con reglas especiales para el disipador: art. 448 CC, para el demente: art. 462 CC, y para el sordo o sordomudo: art. 470 CC).

#### *vii) Terminación de la incapacidad y rehabilitación*

extingue por el solo hecho de alcanzar el incapaz la mayoría de edad (18 años). En cambio, el resto de las incapacidades necesitan que se acredite judicialmente que han desaparecido las circunstancias que autorizaron la interdicción. Este proceso se denomina "rehabilitación" del incapaz.

Así, en caso del disipador bastará que el juez considere que puede ejercer administración de su patrimonio sin inconveniente. Deben aplicarse las mismas medidas de publicidad que para la interdicción (arts. 454 CC).

El demente puede ser rehabilitado si se prueba que ha recobrado permanentemente la razón. Deben cumplirse las mismas formalidades de publicidad que para la interdicción (art. 468 CC).

Por último, cesa la incapacidad del sordo o sordomudo desde que se haya hecho capaz de entender y ser entendido claramente y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes, sobre lo cual el juez debe oír informe de peritos (art. 472 CC).

La sentencia que declare la rehabilitación del disipador y del demente debe ser objeto de las mismas publicaciones e inscripción que la interdicción. Estas medidas de publicidad se limitarán a expresar que tal individuo, designado por su nombre, apellido y domicilio, tiene la libre administración de sus bienes. Si el rehabilitado volviere a recaer en la causal de incapacidad, no hay obstáculo para que se pida nuevamente la interdicción (arts. 454, 455 y 468.2 CC).

### *c) Situación del menor de edad sujeto a patria potestad*

Los incapaces que son menores de edad que tienen padre o madre que puedan ejercer su patria potestad no necesitan que se les nombre un guardador, porque su representante legal será el padre o madre que ejercen dicha potestad.

La patria potestad se define como el conjunto de derechos y deberes

En general, el hijo se emancipa legalmente con la mayoría de edad y se vuelve capaz. Si la emancipación ocurre antes (por ejemplo por muerte de ambos padres) deberá nombrarse tutor o curador.

Los padres pueden acordar cuál de ellos ejercerá la patria potestad del hijo, y si no hay acuerdo se entiende que la ejercen conjuntamente (art. 244 CC). Si viven separados, la patria potestad corresponderá al padre o madre que tenga el cuidado personal del hijo (art. 245 CC). A falta de ambos (por ejemplo, si el niño es huérfano), se le debe nombrar un tutor (si es impúber, esto es, varón menor de 14 y mujer menor de 12 años) o curador (si es menor adulto: varón de 14 y mujer de 12 o más, pero menores de 18 años).

La patria potestad tiene tres atributos: el derecho de goce, el de administración y el de representación. Por ahora, nos corresponde estudiar la representación.

Cuando se trata de un impúber el padre debe representarlo, es decir, el padre concurre en el acto y no el hijo. Cuando se trata de un menor adulto puede representarlo o también autorizarlo (es decir, el hijo comparece en el acto como parte y el padre en una cláusula lo autoriza). También se permite que ratifique después un acto que el hijo ejecutó por sí mismo sin autorización.

Además, el menor adulto puede actuar libremente en la gestión de su peculio profesional o industrial, o sea se le considera mayor de edad o capaz (art. 251 CC). Pero para enajenar o gravar bienes raíces o sus derechos hereditarios, necesita autorización judicial con conocimiento de causa (art. 254 CC).

Si el impúber actúa por sí solo sobre sus bienes, sus actos son nulos absolutamente.

Si se trata de un menor adulto que actúa sin autorización o ratificación del titular de la patria potestad habrá que distinguir: a) Si actuó en el ejercicio de su peculio profesional, sus actos son válidos y eficaces en su contra (salvo

estos bienes (art. 260.1 CC). Pero los préstamos de dinero a interés que tomara o las compras al fiado que hiciere sin autorización escrita del padre o madre, si bien son válidos, no lo obligan sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado del acto (art. 260.2 CC).

Cuando el titular de la patria potestad representa, autoriza o ratifica los actos del menor sujeto a patria potestad, se obliga el patrimonio del padre o madre que intervino primeramente (si hay sociedad conyugal es una deuda de la sociedad), y sólo en subsidio (o sea si el padre no tiene bienes), obliga al menor, pero sólo hasta concurrencia del beneficio que hubiere reportado el hijo del acto o contrato (art. 261).

Debe tenerse en cuenta que en caso de patria potestad conjunta, que es la regla supletoria, los padres pueden actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Si se trata de un acto dispositivo, que no es de mera conservación, será necesaria la voluntad conjunta, salvo autorización judicial (arts. 244.3 y 245.3 CC).

#### *d) Situación del pupilo sujeto a tutela o curatela general*

Los pupilos sujetos a guarda son el menor no sujeto a patria potestad y las personas que hayan sido declaradas interdictas por demencia, disipación o sordomudez. Al impúber se le da tutor, a los demás curador general. Los tutores y curadores generales velan sobre la persona y los bienes de sus pupilos.

Los derechos y deberes del guardador sobre la persona del pupilo están muy detalladamente regulados respecto de impúber (arts. 428 a 430 CC), y menos para el menor adulto (art. 438 CC), el disipador (art. 453) y el demente (arts. 466 y 467 CC).

La administración de los bienes corresponde al guardador, que es el representante legal del pupilo (art. 43 CC). Pero el menor adulto y el disipador pueden gozar de cierta autonomía en la gestión de ciertos bienes:

le deje una suma de dinero para sus gastos personales que será de libre disposición (art. 453 CC).

Los actos de los incapaces absolutos sólo son válidos si se ejecutan por su representante legal. Para el menor adulto, si el pupilo ejecuta un acto sin la autorización o ratificación del curador, se aplican las mismas reglas que para la patria potestad (art. 439.2 en relación con art. 260 CC).

#### *e) Tendencias modernas en materia de incapacidad*

La regulación de las incapacidades jurídicas se ha modernizado en la mayoría de las legislaciones, mediante reformas a los Códigos Civiles o con leyes especiales. Junto con poner al día la terminología se intenta que las leyes no contribuyan a la marginalización de estas personas y a que, por el contrario, hasta donde sea posible puedan ser integradas en la sociedad.

Se advierte, además, que es necesario respetar su autonomía en la mayor medida posible, buscando siempre conocer cuáles son sus deseos e intereses. Para ello las medidas de protección son menos invasivas y se modulan con mayor flexibilidad según los grados de las patologías que sufren estas personas. Así puede irse desde la sustitución completa de la voluntad del incapaz, en los casos de enajenación o inconsciencia total, a fórmulas de asesoría o acompañamiento, siempre bajo la tutela permanente de órganos públicos encargados y de los jueces.

En toda esta evolución ha tenido especial relevancia la conciencia que se ha ido tomando de un adecuado tratamiento jurídico de las personas discapacitadas o con capacidades diferentes.

### *3. Las personas discapacitadas*

#### *a) La discapacidad y su regulación*

Buscando una terminología que evite la estigmatización de las personas

un punto de vista jurídico, se ha evolucionado también desde un enfoque puramente médico hacia uno psicosocial y de derechos humanos.

En materia de legislación interna, en 1994 se dictó la ley N° 19.284, cuyo propósito fue establecer normas para obtener la plena integración de las personas discapacitadas.

En el ámbito internacional, el 2006 fue suscrita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por las Naciones Unidas. Dicha Convención señala que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 1.2). El objetivo de este texto internacional es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (art. 1.1).

El Estado de Chile suscribió y luego ratificó dicha Convención (D.S. N° 201, Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, D. Of. 17 de septiembre de 2008).

En un esfuerzo por poner al día nuestra legislación y atendido el nuevo enfoque de la Convención, se dictó la ley N° 20.422, de 2010, que sustituyó la ley N° 19.284, para establecer normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Se entiende por persona con discapacidad “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 5°). La calificación de la discapacidad corresponde a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o a entidades reconocidas para ello por el Ministerio de Salud. La certificación de la discapacidad corresponde sólo al Compin. Esta gestión puede efectuarse a petición del mismo discapacitado, de su

La ley establece los principios inspiradores y diversas medidas en cuanto a la igualdad de oportunidad, la accesibilidad, la educación, la capacitación laboral y facilidades arancelarias. Es de destacar que la ley reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda (art. 26).

Para las personas con discapacidad intelectual, sigue vigente la ley N° 18.600, de 1987, aunque modificada sustancialmente por la ley N° 20.255, de 2008. Lamentablemente las modificaciones han olvidado modernizar el título de la ley que sigue hablando con terminología que hoy resulta agravante de “Deficientes mentales”.

Como una forma específica de ayuda a la discapacidad debe considerarse la ley N° 20.183, de 2007, que modificó el art. 61 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir que personas discapacitadas pudieran ejercer el derecho de sufragio mediante la asistencia de terceras personas. Cabe también mencionar la ley N° 20.957, de 2016, que modificó el Código Orgánico de Tribunales para permitir a personas ciegas, sordas o mudas acceder a las funciones de juez y de notario.

#### *b) Discapacidad e incapacidad*

No toda discapacidad produce una incapacidad jurídica, sino únicamente aquellas que impiden o dificultan sustancialmente a la persona dirigirse a sí misma o administrar competentemente su patrimonio. Así una persona con discapacidad visual (no vidente) es plenamente capaz, porque a pesar de su problema, puede autogobernarse y administrar sus bienes. Hay también incapaces que no son personas discapacitadas, como por ejemplo los menores de edad y, probablemente, los que son interdictos por disipación.

Pero hay sectores de confluencia: las discapacidades mentales o intelectuales y las de comunicación coincidirán normalmente con causas que la ley determina como incapacidades jurídicas. Así, lo que hoy el Código Civil denomina “demencia” se asocia a diferentes discapacidades ya sean



de carácter mental o cognitivo que ha impedido al discapacitado aprender a escribir o a comunicarse con el lenguaje de señas.

Las complicaciones que las normas ordinarias de interdicción producen frente a lo manifiesto de la discapacidad intelectual ha motivado al legislador a diseñar algunas curadurías especiales en favor de estas personas.

Así, tenemos una curaduría provisoria de bienes que se otorga por el solo ministerio de la ley cuando una persona natural o jurídica, que está inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, tengan bajo su cuidado permanente a una persona con discapacidad mental, cualquiera sea la edad de ésta (art. 18 bis ley N° 18.600). Otra curaduría, esta vez general pero con un procedimiento judicial simplificado, se concede a los padres de la persona que haya sido inscrita como discapacitada mental. El juez, con el mérito de la certificación y previa audiencia de la persona con discapacidad (es decir, en un procedimiento voluntario), puede decretar la interdicción definitiva por demencia del discapacitado y nombrar como curador al padre o madre que lo tenga bajo su cuidado. Si está bajo el cuidado permanente de ambos padres, puede otorgar la curaduría a ambos conjuntamente. A falta de padres, la curaduría puede ser solicitada por otros parientes cercanos. Esta interdicción por demencia es menos absoluta que la ordinaria ya que se permite que el discapacitado, con autorización de su curador, pueda celebrar contratos de trabajo e incluso administrar una suma de dinero para gastos personales (art. 4° ley N° 18.600).

#### *4. Las personas pertenecientes a etnias indígenas*

La ley N° 19.253, de 1993, establece normas sobre protección de los indígenas. Esta ley establece el reconocimiento como principales etnias indígenas de Chile a la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, las de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguitas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes (art. 1°).

1°) Que sean hijos de padre o madre indígena. Se entiende por hijos de padre o madre indígena los descendientes de los habitantes originarios de las tierras indígenas.

2°) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena.

3°) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual, o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos es necesario que se autoidentifiquen como indígenas (art. 2°).<sup>1</sup>

La calidad de indígena se acredita mediante un certificado que otorga la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Si esta deniega el certificado, procede reclamo ante el juez de letras respectivo. Todo interesado puede impugnar la calidad de indígena que invoque otra persona, aunque tenga el certificado recurriendo también al juez de letras (art. 3°). Se penaliza al que se atribuye la calidad de indígena sin serlo, para obtener un beneficio económico establecido para los indígenas (art. 5°).

Las tierras indígenas tiene un régimen especial. Se inscriben en un Registro Público de Tierras Indígenas que lleva la Conadi. Estas tierras no pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción sino entre comunidades y personas indígenas. Tampoco pueden ser arrendadas, dadas en comodato ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Pero se permite, con autorización de la Conadi, permutar tierras indígenas por otras que no lo sean, de similar valor comercial. En tal caso se desafectan unas y se afectan las otras. La contravención de estas normas es sancionada con la nulidad absoluta (art. 13).

La sucesión de tierras indígenas individuales se sujeta a las normas del derecho común y las de tierras indígenas comunitarias a la costumbre que cada etnia tenga en materia de herencia, y en subsidio por la ley común (art. 18). Es de notar que se reconozca la costumbre como fuente de derecho prevalente a la ley civil.

BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL: FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, “La capacidad de goce ¿admite excepciones?”, en Martinic, María Dora (coord.), *Nuevas tendencias del Derecho*, LexisNexis, Santiago, 2004, pp. 129-140; SILVA CRUZ, Carlos, “La interdicción por ebriedad habitual”, en *RCF*, t. 13, (1899), 3 y 4, pp. 221-249; N° 5 y 6, pp. 257- 275; CLARO SOLAR, Luis, “Condición civil de la mujer. Necesidad de la reforma del Código Civil” en *RDJ* t. 12, sec. Derecho, pp. 217-225; DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen, “Situación de la mujer casada en el régimen patrimonial chileno: mito o realidad”, en *Revista Chilena de Derecho* 26, 1999, 1, pp. 87-103; DOYHARÇABAL CASSE, Solange, “Habilitación de incapaces y tratamiento de disipadores y ebrios”, en *Temas de Derecho* 11, 1996, 1-2, pp. 9-23; “Cuidado de la persona del demente. Comentario al artículo 464 del Código Civil”, en *Temas de Derecho* 11, 1996, 1-2, pp. 83-96; FRIGERIO CASTALDI, César, “Incapacidad civil y representación legal del enfermo mental”, en *Revista Chilena de Derecho* 16, 1989, 1, pp. 37-41; FRIGERIO CASTALDI, C. y LETELIER AGUILAR, Cristián, “Sobre la capacidad de los dementes y sordomudos” en *Revista Chilena de Derecho* 19, 1992, 2, pp. 285-298; URBANO MORENO, Edgardo, “La incapacidad de los sordos y sordomudos”, en *Revista de Derecho* (Universidad Finis Terrae) 7, 2003, pp. 193-204; CORRAL TALCIANI, Hernán, “Interdicción de personas que sufren trastorno de dependencia a la cocaína”, en *Revista de Derecho* (Universidad Austral de Chile), vol. 24, 2011, 2, pp. 31-64; LETELIER, Valentín, “Los pobres”, en *RCF*, t. XI, (1896), N°s. 1 y 2, pp. 5- 21; BARCIA LEHMANN, Rodrigo, “La capacidad extrapatrimonial de los niños y adolescentes conforme a sus condiciones de madurez”, en *Ius et Praxis* 19, 2013, 2, pp. 3-52; ZENTENO BARROS, Julio, “Condición legal del indígena”, en *RCF*, t. V (1889), N° 5, pp. 329-345; N° 6, pp. 413- 429; GREENE C., Alejandro, “Condición jurídica de los indígenas en Chile”, en *RCF*, t. X, (1895), N°s. 11 y 12, pp. 641- 652; ERBETA, León, “Situación jurídica y social de los indios mapuches”, en *RDJ*, t. 52, Derecho, pp. 119-138; ROMERO SEGUEL, Alejandro, “La adecuación del procedimiento en materia de derecho indígena”, en *Revista Chilena de Derecho* 39, 2012, 3, pp. 819-828; LATHROP, Fabiola, “Protección jurídica de los adultos mayores en Chile”, en *Revista Chilena de Derecho* 36, 2009, 1, pp. 77-113; NÚÑEZ POBLETE, Manuel, “La constitución de la propiedad indígena como fin de la expropiación por interés nacional”, en *Revista de Derecho* (Universidad Austral de Chile), 30, 2017, 1, pp. 205-23.

## V. EL ESTADO CIVIL Y EL REGISTRO CIVIL

### 1. Concepto y caracteres del estado civil

El art. 304 del Código Civil define el estado civil como “la calidad de

La doctrina concuerda en que puede conceptualizarse el estado civil como la posición permanente que la persona ocupa en la sociedad dependiendo de sus relaciones de familia. Normalmente se tiene en cuenta el estado civil relativo al matrimonio y se habla de estados de casado, soltero, divorciado o viudo. Pero las relaciones de familia son también las de filiación, de modo que existe el estado civil de padre, madre o hijo. Como modalidad de este estado civil, y atendiendo a las formas de determinación de la filiación, puede hablarse también de estado civil de hijo de filiación matrimonial (si los padres están casados), hijo de filiación no matrimonial (si los padres no están casados) e hijo de filiación no determinada.

Los principales caracteres del estado civil son los siguientes:

1º) Universal: Toda persona natural tiene estado civil. No lo tienen, en cambio, las personas jurídicas.

2º) Único: No puede tenerse a la vez diversos estados civiles conforme a una misma relación de familia. Por ejemplo, no se puede ser casado y soltero a la vez.

3º) Permanente: Su duración es indefinida y puede cambiar si se dan los hechos necesarios para adquirir un nuevo estado civil, pero tendencialmente es permanente.

4º) Personalísimo e intransferible: Es una cualidad que pertenece a la estructura esencial de la persona, por lo que no está en el comercio humano. El estado civil no se puede enajenar ni transmitir por causa de muerte. Tampoco se puede transigir sobre el estado civil (art. 2450 CC).

5º) Imprescriptible: El estado civil, siendo una cosa que no está en el comercio, no puede adquirirse por prescripción (art. 2498 CC).

6º) De orden público e irrenunciable: El estado civil es una institución de orden público, que se sustrae de la voluntad de los privados. Por lo mismo no puede ser renunciado (art. 12 CC).